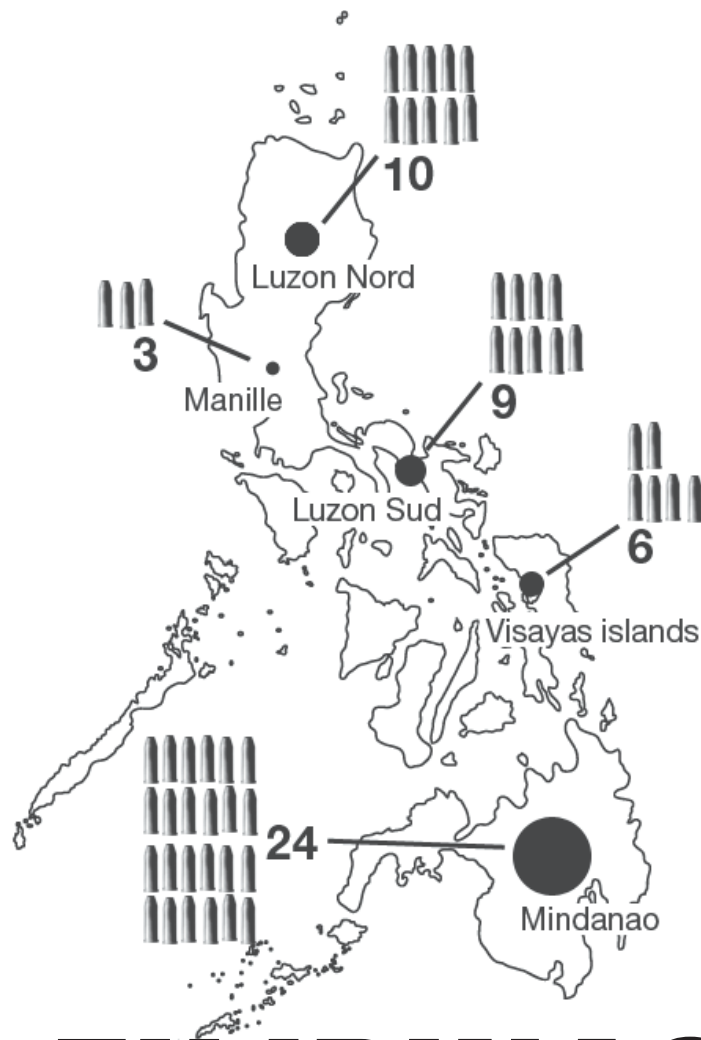




www.rsf.org



FILIPINAS

ACABAR CON LA IMPUNIDAD

« Justicia para Marlene Esperat
y los otros 51 periodistas
muertos o asesinados desde 1986 »



Mayo de 2005

Investigación : Vincent Brossel y Jean-François Julliard

Reporteros sin fronteras

Secretaría Internacional

Despacho Asia

5, rue Geoffroy Marie

75009 Paris-France

Tél. (33) 1 44 83 84 70

Fax (33) 1 45 23 11 51

E-mail : asia@rsf.org / asia@rsf.org

Web : www.rsf.org

No pasa un día sin que la prensa filipina dé cuenta de un asesinato, una agresión o una amenaza que afecten a un periodista. Esa prensa, que sin embargo es una de las más libres de Asia, está en peligro. Desde la vuelta de la democracia, en 1986, al menos han matado a 52 profesionales de la información por su trabajo; a diez de ellos en el año 2004. Y, tan solo en los tres primeros meses de 2005, han asesinado a tres periodistas, entre los que se encuentra Marlene Esperat, conocida por sus estruendosas investigaciones sobre casos de corrupción.

Unas cifras excepcionalmente elevadas para un Estado democrático. Solo algunos países en guerra, como Irak, la ex Yugoslavia y Argelia, han tenido unos balances tan graves. Y, quizá lo más grave, es que la policía y la justicia son incapaces de detener y condenar a la práctica mayoría de los asesinos. Sin hablar de los autores intelectuales, que hasta ahora disfrutaban de total impunidad.

Esa dramática situación no ha tenido consecuencias reales en la libertad de tono de los medios de comunicación filipinos, con excepción de algunas regiones donde se ha vuelto imposible practicar un periodismo independiente. Estos asesinatos en serie, una media de tres por año, hasta muy recientemente no motivaron ninguna reacción enérgica de las autoridades. Con una escandalosa indiferencia, el Estado filipino ha dejado que mataran a medio centenar de periodistas. Ahora, para romper el círculo vicioso de la impunidad, hay que acentuar la movilización nacional e internacional.

Los asesinatos dirigidos se inscriben en una oleada de violencia más amplia y generalizada contra los militantes políticos, y los defensores de los derechos humanos. Desde el 1 de enero de 2005 han abatido al menos a 31 de ellos.

En varias regiones, los periodistas trabajan en un ambiente hostil, hecho de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y algunos grupos armados o terroristas, y entre ellos el grupo Aby Sayaf, relacionado con la nebulosa Al-Qaeda y activo en el sudoeste del país (Basilán y las Islas Sulu). Desde hace varias décadas, también la isla de Mindanao se ve

agitada por los combates entre el ejército y algunos movimientos separatistas, entre los que se encuentra el Frente Moro Islámico de Liberación (MILF). En el norte de la Isla de Luzón o en algunas islas de las Visayas, el Nuevo Ejército del Pueblo (comunista) lucha también contra las fuerzas de seguridad.

En el plano político, la presidenta Gloria Arroyo, llegada al poder tras la destitución, por corrupción en 2001, de Joseph Estrada, resultó reelegida en mayo de 2004. Pero, en 2003, tuvo que enfrentarse a un amotinamiento de militares y, en 2004, a una oleada de atentados en la isla de Mindanao y en la capital.

Una misión de investigación de Reporteros sin Fronteras viajó a Filipinas, del 8 al 14 de abril de 2005, con el fin de entrevistarse con las familias de los periodistas asesinados, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las autoridades. Los representantes estuvieron en Manila, General Santos, Tacurong, Cagayán de Oro y la provincia de Laguna. Entre otros, recibieron a la delegación el Ministro de Justicia y el director de la policía nacional. Raúl González y Arturo Lomibao se comprometieron con Reporteros sin Fronteras a acelerar el trabajo de la justicia y la policía, en los casos de periodistas asesinados.

Igualmente, Reporteros sin Fronteras quería aclarar los motivos de algunos asesinatos. Resultó que en un número nada despreciable de casos –7 casos de los 13 registrados en 2004 por la Federación Internacional de Periodistas– las causas de la muerte no están relacionadas con sus actividades profesionales sino, a veces, con prácticas de extorsión. La organización está convencida de que es muy importante diferenciar esos casos porque si no se corre el riesgo de desacreditar nuestro combate por la libertad de prensa. Por eso, Reporteros sin Fronteras ha reseñado “solamente” seis casos de periodistas muertos en 2004, y cincuenta y dos desde 1986.

El último asesinato en el tiempo, el de la periodista Marlene Esperat, ha generado un trauma

en la comunidad periodística, muy feminista. “Si son capaces de abatir a una periodista de investigación, incluso a pesar de que tenía protección policial, todas nosotras, las mujeres periodistas, estamos en peligro. ¿Quién puede



El lugar del crimen

protegernos?", explica Diosa Labiste de Iloilo City, quien ha realizado un estudio sobre los asesinatos de periodistas en Filipinas.

El caso de **Marlene Esperat** representan una auténtica prueba para la presidenta Gloria Arroyo, la policía y la justicia. La detención y condena de los asesinos, y de los autores intelectuales, podrían hacer esperar el final de un terrible ciclo de violencia contra la prensa. Pero el Estado, que durante mucho tiempo ha permanecido indiferente ¿tendrá la voluntad y la capacidad de llegar hasta el fondo en su deber de justicia?

Marlene Esperat: la muerte anunciada de la Erin Brockovich de la prensa filipina



El 24 de marzo de 2005, a las 19, 30 horas, el asesino, con el rostro medio tapado por una gorra, entró en el comedor donde Marlene Esperat cenaba con sus dos hijos, Kevin Jorge y James Derek, de 13 y 10 años respectivamente.

Le saludó, "Buenas tardes, señora", sacó un revolver de la chaqueta, apuntó el cañón hacia la cabeza de Marlene y la derribó de un balazo encima del ojo derecho. La periodista murió en el acto, ante la mirada impotente de sus dos hijos y de su hija, Rhynche Arcones, de 23 años, que también se encontraba en la casa. El 9 de abril, más de dos mil personas, entre las que se encontraban sus octogenarios padres, acompañaron los restos de la periodista al cementerio de Tacurong (suroeste de la Isla de Mindanao).

A pesar de que tenía protección policial permanente desde comienzos de 2003 –fecha de un ataque de granada a su domicilio, nunca elucidado-, la periodista de Tacurong se sabía amenazada. Nunca salía sin ir acompañada por uno, o dos, policías armados. Pero, la víspera del homicidio, había dado permiso para quedarse en casa al agente encargado de su protección, para celebrar la Pascua en familia. El, le pidió entonces que no saliera del domicilio.

Marlene Esperat sabía que iba a morir. El 14 de febrero de 2005 dirigió una carta a la presidenta Gloria Arroyo, en la que reiteraba su lucha contra la corrupción. "Estoy dispuesta a morir por esta causa, pero usted no podrá parar nunca la voluntad de Dios", escribió al final de la misiva. Dos meses antes de que la mataran, la



El director del Midland Review

periodista trasladó todos sus dossier a la oficina de su abogada, y tenía pensado solicitar visados para Suiza y Canadá.

Marlene Esperat llegó al periodismo para hacer público su trabajo de denuncia de la corrupción, entre otros sitios en el Departamento de Agricultura de Mindanao. También explicaba que se había dado cuenta de la importancia de los medios de comunicación a través de su primer marido, **Severino Arcones**, responsable de la emisora *Radio Bombo-DYFM* en Iloilo City (centro del país), también asesinado en 1989 por sus críticas de algunos políticos locales. Presentadora de un programa en la radio local de FM *DXKR* desde 2001, Marlene Esperat empezó a publicar a finales de 2002 la sección "Madam Witness", en el semanario local *Midland Review*. Según su abogada, Marlene Esperat, que estudió química, concedía mucha importancia al trabajo de periodista. "Eso le permitía conseguir más información, defender a los pequeños agricultores víctimas de la corrupción y hacer oír una voz ciudadana y valiente", precisó Nena Santos a Reporteros sin Fronteras.

"Nunca cesaba de buscar nuevos casos de malversación. Con las pruebas en la mano, las confrontaba con las personas que le parecían sospechosas. Luego, llevaba el caso al Defensor del Pueblo encargado de la corrupción. Como eso no era suficiente, publicaba las informaciones en su sección semanal, las contaba por la radio o las compartía con periodistas de Manila. No ponía límites a su lucha contra la corrupción", añadió Nena Santos.

Teniendo en cuenta los casos más recientes en los que trabajaba Marlene Esperat, Reporteros sin Fronteras ha elaborado una lista de veinticinco nombres de personalidades, directamente implicadas por la periodista: tres funcionarios del Departamento de Agricultura de Cotabato City, catorce responsables nacionales del Departamento de Agricultura, un Ministro en activo, un oficial del ejército, un diputado del Congreso, dos empresarios de Manila,

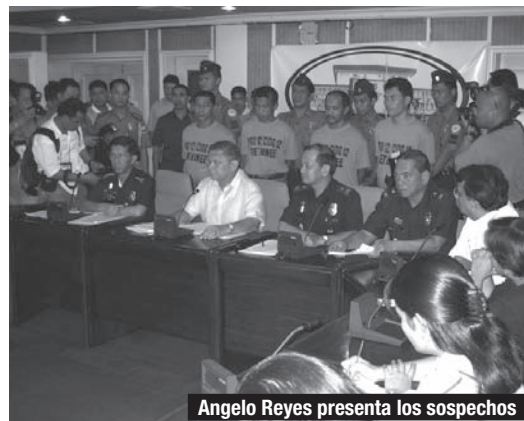
dos políticos de Tacurong, entre ellos Angelo Montilla, y un oficial de policía. "¿Quién tenía más razones para matarla?", se pregunta un amigo periodista de Manila. "Temo que la policía se oriente hacia una pista local, cuando Marlene implicó a personalidades nacionales. Los escándalos de los fertilizantes o el tráfico de pollos, que fueron portada de los periódicos, tuvieron que molestar a más de un político nacional. Pero, ¿de ahí a matarla!", precisa esa misma fuente, que quiere guardar el anonimato.

"Ahora que está muerta ¿qué va a pasar con la decena de casos planteados en la oficina del Defensor del Pueblo? Si su marido o sus hijos no los retoman, las personas implicadas se van a sentir muy aliviadas", quiere precisar una allegada de Marlene Esperat. "Su muerte no debe ser en vano. Es una prueba para el gobierno de Gloria Arroyo, en su lucha contra la corrupción. Marlene Esperat era un modelo. Nunca se dejó comprar, cuando le ofrecían cientos de miles de pesos por retirar sus denuncias", cuenta Nena Santos, su abogada.

Los investigadores del Criminal Investigation and Detection Group (CIDG, policía criminal), presionados por el general Arturo Lomibao, director nacional de la policía, que acudió a Tacurong tan solo tres días después del homicidio, se pusieron inmediatamente a perseguir a los asesinos. El 8 de abril se entregó a las fuerzas del orden Randi Grecia, uno de los sospechosos. En la semana siguiente, los policías detuvieron a otros tres sospechosos, y entre ellos al presunto asesino, Jerry Cabayag. "Nos sentimos optimistas sobre el resultado de esta investigación, a pesar de nuestra escasez de medios. Tenemos a los asesinos, el arma y el vehículo del crimen, y algunos testigos visuales. Nos falta el, o los autores intelectuales", explicó el coronel Danilo Galapon entrevistado en Koronadal, cerca de Tacurong. También excluyó cualquier posibilidad de chantaje de parte de Marlene Esperat: "Vivía humildemente, y su casa estaba hipotecada". Según ese mismo investigador, los cuatro sospechosos han confesado haber recibido 120.000 pesos (cerca de 2.500 euros), por ejecutar a la periodista.

El 12 de abril, el Ministro del Interior Angelo Reyes, acompañado del director de la policía, presentó a los cuatro sospechosos en una conferencia de prensa, en Manila. "Me siento feliz por la detención de estos ejecutantes del caso Esperat. Le hemos dedicado una particular atención porque se trata de un caso de libertad de prensa", declaró el Ministro ante la prensa. "Han reconocido su crimen. Seguimos

buscando a los autores intelectuales".



Angelo Reyes presenta los sospechosos

A través de la prensa, el Ministerio de Justicia pidió a la policía que no limitara la investigación a los asesinos, sino que continuara hasta identificar a los intermediarios y a los autores intelectuales. Por su parte, la policía ha implicado al National Bureau of Investigation (NBI), dependiente del Ministerio de Justicia, al que acusó de revelar prematuramente a la prensa la identidad del supuesto autor intelectual, el funcionario del Departamento de Agricultura Sumail Sekak. "El NBI solo participó en la autopsia, y no en la investigación ¿Cómo pueden conocer la identidad del autor intelectual?", se preguntaba un jefe de la policía.



La familia de Marlene Esperat

"Tengo miedo de que la investigación se pare si la policía se da cuenta de que el autor intelectual está situado demasiado alto", confió una de las hermanas de Marlene Esperat a Reporteros sin Fronteras.

Impunidad total para los autores intelectuales

Una aplastante mayoría de los 52 periodistas muertos o asesinados lo fueron a manos de asesinos a sueldo, pero nunca han condenado a ninguno de los autores intelectuales. Esa impunidad total es la principal razón de este ciclo de homicidios, cometidos con la prensa. Si se termina con la impunidad desaparecerá la cultura de la violencia, frecuentemente invocada como justificación de los asesinatos.

Casos de Edgar Damalerio y Edgar Amoro: intocables los autores intelectuales



El periodista **Edgar Damalerio** no conocía al policía Guillermo Wapile que, el 13 de mayo de 2002, le mató a bocajarro. Encarcelado ahora, el sospechoso, que habría recibido 100.000 pesos (cerca de 2.000 euros), sigue negándose a facilitar el nombre del, o los autores

intelectuales del asesinato de este periodista de Pagadián (oeste de Mindanao), conocido por sus denuncias de la corrupción. En cambio, dos testigos, el periodista Edgar Amoro y el miliciano Jury Ladica Lobitaña han sido físicamente eliminados, en 2005 y 2002 respectivamente. Ambos habían aceptado testimoniar ante la justicia contra Guillermo Wapile. Edgar Ongue, amigo de Edgar Amoro, es el último testigo vivo.

“En Pagadián todo el mundo tiene una idea acerca de la identidad de los autores intelectuales de las ejecuciones de Edgar Amoro y Edgar Damalerio, salvo la policía local que nunca ha buscado más allá del sospechoso identificado por los testigos del crimen”, afirma una persona cercana al caso. Tan solo algunos periodistas de Manila se atreven a dar pistas sobre los posibles autores intelectuales. “Está claro que la policía debería investigar las actividades de la pareja Cerilles, que domina la vida política local. También debería interrogar al ex alcalde. Guillermo Wapile era su guardaespaldas”, afirma Sheila Coronel del PCIJ, que investigó en Pagadián tras el asesinato de Edgar Damalerio.

En ese caso, las autoridades han menospreciado el papel jugado por el superior jerárquico del sospechoso, el ex jefe de la policía local

Sauri Hawani. “Desde el principio ayudó a Guillermo Wapile a escapar de la justicia. La policía, o el NBI, tendrían que haberle detenido por complicidad, o por obstrucción a la justicia. Pero, nada de nada.

Le cesaron en sus funciones en la policía. Pero se ha convertido en consejero especial del alcalde de Pagadián. Y somos muchos los que pensamos que también está implicado en el asesinato de Edgar Amoro. Pero la policía no hace nada”, indica un allegado de la familia Damalerio, que quiere permanecer en el anonimato.



Gemma Damalerio

Amenazas de muerte por SMS

“Si no mueres fuera, morirás dentro del tribunal”. Este SMS lo recibió, en diciembre de 2004, Edgar Ongue, el último testigo ocular del asesinato del periodista Edgar Damalerio. En un país en el que diariamente se envían más de diez millones de SMS, los asesinos utilizan los teléfonos móviles para amenazar a sus víctimas. Edgar Ongue, ahora protegido por el Departamento de Justicia, recibió amenazas aun más precisas en su teléfono móvil: “Duha ka grupo ang maghanting nimu karm pads, basta ayaw jud kumpyansa laag pagadian, kablonka sa isa ka grupo, balhen ug puyo kay naheblo cla naa ka tangub” (“Hay dos grupos que te buscan. No estás seguro en Pagadián. Conoces al primer grupo, pero los otros saben que has cambiado de domicilio y que estas en Tangub”). Agricultor y padre de tres niños, a Edgar Ongue le ofreció diez mil dólares uno de los tíos del sospechoso Guillermo Wapile, a cambio de que se negara a testimoniar en el juicio. Rechazó la oferta. Tras escapar a un tercer intento de asesinato el 9 de febrero, Edgar Ongue mira celosamente los mensajes en su teléfono móvil. Una prueba de que, incluso tras la detención del sospechoso, su vida pende de un hilo.

El juicio de Guillermo Wapile tenía que empezar el pasado 25 de abril, con una primera vista ante el juez Ramón Codilla en Cebú, una ciudad más segura para los testigos de Pagadián. Pero los abogados del sospechoso han conseguido retrasar el inicio de las vistas, invocando puntos de procedimiento. El próximo 3 de mayo, las dos partes deberán presentar la lista de testigos, que no podrá modificarse después. Después, deberían comenzar las sesiones, para durar como mucho unas pocas semanas. “La presión de los medios de comunicación ha logrado el traslado del caso de Pagadián a Cebú, la protección de testigos y la preparación del juicio en buenas condiciones. Y, sobre todo, no se dilatará mucho”, afirma Gemma Damalerio, viuda del periodista y madre de una niña de tres años.

Pero ha habido que esperar más de tres años para que finalmente se juzgue a este policía de Pagadián, identificado desde el primer momento por dos testigos, Edgar Amoro y Edgar Ongue. No existe ninguna duda de que Gui-

Ilermo Wapile tuvo muchas complicidades en Pagadián. Así, en febrero de 2003 consiguió escapar de un campo de la policía. Guillermo Wapile se entregó a las autoridades, tras una campaña de prensa nacional e internacional. Pero continúa declarándose no culpable, se niega a dar el nombre de sus cómplices y de los autores intelectuales y, sobre todo, ha conseguido hacer eliminar a dos testigos, entre ellos el periodista Edgar Amoro.

El último testigo, Edgar Ongue, que se encuentra incluido en el Programa de Testigos del Departamento de Justicia, es categórico: “Han lanzado a dos grupos de asesinos contra mí. Vivo con miedo. Pero voy a testimoniar a favor de Edgar Damalerio. Tengo paciencia y todavía creo en la justicia”. Uno de los responsables del programa de protección confirma: “Si matan a este último testigo visual, el caso será sobreseído”.

Desde mayo de 2002, la falta de voluntad local y nacional de llevar la investigación más allá del sospechoso ha tenido como trágica consecuencia la eliminación física de dos testigos. En primer lugar Jury Ladica Lobitaña, asesinada en agosto de 2002, después de que asegurara al NBI que un responsable local de la policía le había ofrecido el equivalente a 1.000 euros, por ejecutar a Edgar Damalerio. Después, Edgar Amoro fue abatido delante de un colegio de Pagadián. “Al matar a mi marido han eliminado a un testigo clave en el caso Damalerio, y a un hombre valiente que seguía denunciando la corrupción y las injusticias sociales en Pagadián. Cinco días antes de su muerte leyó, en su programa de la radio *DXKP*, una carta abierta denunciando la ausencia de Estado de derecho en Pagadián”, explicó a Reporteros sin Fronteras Elvira Amoro. Acogida al Programa de protección de testigos, se ha marchado de Pagadián con sus seis hijos.



Edgar Amoro

La viuda de Edgar Amoro también reveló que su marido recibió en 2002, tan solo pocos días antes del cese de Sauri Hawani en su puesto de jefe de la policía de Pagadián, una amenaza de muerte en un SMS: “Has arruinado nuestras vidas. Tu familia y tu vais a tener que pagarlo con vuestras preciadas vidas”.

Reporteros sin Fronteras está en grado de afirmar que algunos superiores jerárquicos y allegados de Guillermo Wapile han conseguido, gracias a la complicidad de la policía, eliminar

a Edgar Amoro. Así, los dos asesinos se encontraban esperando en el interior del colegio donde Edgar Amoro, de 46 años, enseñaba inglés. Solo pudieron entrar contando con la complicidad de los dos guardias apostados en la entrada del establecimiento, que están contratados por la agencia privada de seguridad Sikatuna, dirigida por un pariente de Sauri Hawani.

Los asesinos le abatieron delante de varias decenas de testigos, y entre ellos Samuel Porsuelo, agente del municipio encargado de la circulación delante del colegio. Tras el crimen, este testigo firmó una primera declaración ante la policía, y después huyó de la ciudad. Estaría recibiendo presiones de Sauri Hawani, ahora responsable de seguridad en el municipio, para que no testimonie.

Más grave aun, uno de los dos presuntos homicidas de Edgar Amoro, el asesino a sueldo Madix Maulana, fue detenido por un oficial de policía de Pagadián, en el marco de otro homicidio. El periodista se había felicitado, en las ondas, por la detención. Pero este sospechoso, protegido por algunas personalidades locales, quedó en libertad pocas semanas antes del asesinato de Edgar Amoro. Uno de los fiscales de Pagadián minimizó voluntariamente las acusaciones, para permitir que saliera en libertad con fianza. Ahora, Madix Maulana estaría “vigilado” por uno de sus allegados. Igualmente, Norhan Ambol, otro sospechoso en el asesinato de Edgar Amoro, no habría sido molestado por la policía.

La afirmación de una voluntad política

En vísperas de la llegada de la misión de Reporteros sin Fronteras a Filipinas, la presidenta Gloria Arroyo declaró ante la Unión Interparlamentaria (IPU) reunida en el país, que “había acabado el tiempo de los asesinos de periodistas”. Tras dos décadas de inacción, las autoridades de Manila parecen finalmente darse cuenta de la situación, y estar dispuestas a encauzar esa oleada de violencia contra algunos profesionales de la información.

Para empezar, el gobierno propuso soluciones que la profesión rechazaron rápidamente. Así, el jefe de la policía pensó, a comienzos de 2004, en aligerar la ley sobre la posesión de armas, para permitir que los periodistas se defendieran ellos mismos. Un portavoz de la presidencia también pidió, en mayo de 2004, que los periodistas de radio verificaran mejor sus informaciones, para evitar incitar a la violencia. Y el gobierno prometió fuertes sumas de dinero



por la captura de cualquier sospechoso.

Luego, la policía creó, en enero de 2004, una “Newmen Task Force” encargada de coordinar desde Manila las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas extendida, a nivel local, a través de Task Forces específicas para cada caso. El responsable nacional de ese dispositivo, en una entrevista con los representantes de Reporteros sin Fronteras, aseguró haber conseguido un índice de resolución de crímenes de periodistas del 90% , desde su creación. De los 58 casos identificados desde 1986, la policía afirma haber resuelto treinta. Los otros 28 se encontrarían en curso de investigación, o estarían relacionados con los enfrentamientos armados. La Philippine National Police (PNP) asegura que dos periodistas murieron en los intentos de golpe de Estado de 1986 y 1989, mientras que a otros cinco los mató la guerrilla comunista, o murieron en combates. Apolinario Pobeda, entre otros, se encuentra incluido en este grupo, cuando la hipótesis más seria está relacionada con las denuncias que el periodista hizo de determinadas autoridades locales. La policía tiene que aclarar este punto.

La “Newsmen Task Force” asegura que desde 1986 se ha detenido a 37 sospechosos, pero precisa que solamente cinco casos terminaron con condenas. Según la policía, la impunidad sería el resultado de una justicia ineficaz.

La PNP ha establecido también mecanismos para proteger mejor a los periodistas, y dinamizar las investigaciones. “Entre otras cosas, queremos reforzar el sistema de recompensas económicas e identificar mejor, para protegerles, a los periodistas más expuestos”, explicó el general Arturo Lomibao a Reporteros sin Fronteras.

Reporteros sin Fronteras ha tomado buena nota de las iniciativas de las autoridades de Manila, para luchar más eficazmente contra la violencia en relación con los periodistas. La organización aplaude igualmente el compromiso personal del director de la PNP, Arturo Lomibao, que acudió a Tacurong tres días después del asesinato de la periodista Marlene Esperat. El 14 de abril también se desplazó a Legazpi (provincia de Albay), para relanzar la investigación en el caso de **Rowell Endrinal**, presentador de la radio local *DZRC*, asesinado de varios disparos, entre ellos cinco en la boca, el 11 de febrero de 2004. El periodista era conocido por sus virulentas críticas, a menudo incitadas por la oposición, de algunos políticos locales; entre ellos el gobernador Francis Bichara, y el alcalde de Legazpi, Noel Rosal.

En este caso, la policía identificó inmediatamente al asesino a sueldo. Pero, más de dos años después de los hechos, Clarito Arizobal, también conocido con el apodo de Boy Zapanta, todavía no ha sido aprehendido, y la investigación no ha permitido conocer a los autores intelectuales. “Rowell Endrinal no era un modelo de periodista porque se vendía a los políticos de la oposición, pero es bien cierto que le mataron por sus ácidos comentarios sobre la vida política local”, explica Sean Bernardo, un periodista de Manila que investigó el caso.

Los esfuerzos de la policía también consiguieron detener a los tres presuntos asesinos de **Apolinario “Polly” Pobeda**, comentarista de radio abatido de siete balas en el cuerpo, el 17 de mayo de 2003, cerca de Lucena (sudeste de Manila). Todos están relacionados con la familia Talaga, uno de cuyos miembros es el alcalde de Lucena. Los sospechosos están encarcelados, pero todavía no ha comenzado el juicio y la policía no ha identificado a los autores intelectuales.

Apolinario Pobeda, de 35 años, practicaba en la radio *DWTI* un periodismo virulento, en el que frecuentemente atacaba a los funcionarios de la ciudad, acusándoles de malversación e incompetencia. Desde agosto de 2002, el presentador incitaba a los oyentes a enviarle SMS, para denunciar a los traficantes de droga de la región. “Como periodista, defendía los intereses de la familia del opositor Ojeda contra la poderosa familia Talaga”, explicó un periodista de Lucena a Reporteros sin Fronteras.

En agosto de 2004, la policía detuvo a Michael García, un asesino a sueldo sospechoso de haber matado al periodista **Arnel Manalo**, corresponsal de la radio *DZRH* y del tabloide *Bulgar* en la provincia de Batangas (sur de Manila). El hermano del periodista, testigo del crimen, identificó al sospechoso. El 2 de septiembre se entregó a las autoridades Edilberto Mendoza, presunto autor intelectual del homicidio. Todavía no han sido juzgados.

En el mismo período se entregaron a la justicia dos sospechosos en el asesinato de **Ely Binoya**. Ephraim Englis, alias “Toto”, y Afonso Toquero siempre han negado su implicación en el caso. La policía sospecha que Ephraim Englis, un ex policía y jefe de pueblo, es el “cerebro” de la operación. El, y otros notables locales, fueron acusados de corrupción por Ely Binoya. La policía ha entregado los resultados de la investigación, pero a los sospechosos no se les ha juzgado.

El discurso voluntarioso de las autoridades policiales y judiciales a veces se contradice con las posturas de los aliados o consejeros de la presidenta Gloria Arroyo. Así, el alcalde de Davao (sur), Rodrigo Duterte, también consejero de la presidenta para cuestiones de seguridad, ataca frecuentemente a los periodistas que critican su gestión de la principal ciudad de Mindanao. Todas las miradas se volvieron hacia él cuando el presentador de radio **Juan Pala**, uno de sus adversarios políticos, fue asesinado en septiembre de 2003. Más recientemente, el alcalde calificó de idiotas a la Federación Internacional de Periodistas y a la Unión Nacional de Periodistas Filipinos, que acababan de denunciar la existencia de escuadrones de la muerte en la región de Davao.

Al menos 42 casos sin resolver

A pesar de que la PNP reivindica un 90% de éxitos desde la creación de la “Newsmen Task Force”, Reporteros sin Fronteras ha podido confirmar que al menos 42, de los 52 casos de periodistas muertos, no se han resuelto, entre otras cosas a causa de la falta de eficacia o de voluntad de la policía nacional. La responsabilidad incumbe a los anteriores responsables, ya que la mayoría de los casos “no resueltos” o “mal resueltos” pertenecen al período 1986-2002.

Un otro presentador de radio de la provincia de Albay, **John Belén Villanueva**, fue asesinado a balazos el 28 de abril de 2003. Según Henry Maceda, director de la emisora *DZBB*, su ex colega no estaba amenazado y era apreciado por sus diálogos con los oyentes y sus programas culturales. Un año después de los hechos, la policía no había conseguido determinar ni los motivos, ni a los autores del crimen. Según algunos periodistas de Legazpi, a John Belén Villanueva podrían haberle matado por sus supuestas relaciones con la guerrilla comunista, o por sus pretensiones electorales en la región.

En Mindanao esta vez, la policía no ha conseguido avanzar en la investigación sobre el asesinato de **Rico Ramírez**, un joven camarógrafo y reportero de la radiotelevisión local *DXSF TV*, abatido de cinco disparos el 20 de agosto de 2003, en San Francisco (provincia de Agusán del Norte). Max Tutor, director de *DXSF*, siempre ha mantenido que a Rico Ramírez, de 25 años y padre de un niño de dos años, le mataron por sus investigaciones sobre el tráfico de droga en la región. Además de esperar dos semanas antes de informar sobre el asesinato, la policía local nunca identificó a los asesinos,

ni estableció las causas del homicidio.

El caso de **Nelson Nadura**, abatido de cinco disparos el 2 de diciembre de 2003 en la Isla de Masbate (sudeste de Manila), nunca acaparó la atención de la policía más allá de la emoción de los primeros días. Según la policía local, el presentador de un programa informativo en la radio local *DYME* fue abatido por sus antiguos compañeros del Nuevo Ejército Popular (guerrilla comunista). Según algunos colegas de Nelson Nadura preguntados por Reporteros sin Fronteras, la policía, que sin embargo había creado una “Task Force Nadura”, nunca investigó sobre otras hipótesis. Chang Enciso, directora de la radio *DYME*, confirmó que la guerrilla comunista había negado cualquier implicación en el homicidio. La viuda y los cuatro hijos del periodista también recordaron que Nelson Nadura no dudaba en criticar a determinados políticos locales.

Reporteros sin Fronteras estima que, en los siguientes casos, la policía no ha efectuado un trabajo suficiente o satisfactorio (no hay detenciones de sospechosos, investigaciones chapuceras, no hay identificaciones de autores intelectuales): Pete Mabazza, Wilfredo Vicoy (1986), Dionisio Joaquín, Leo Palo, Narciso Balani, Rogelio Sagado (1987), Noel Miranda, Rubén Manrrique, Severino Arcones, Josef Aldeguer Nava (1988), Dessié Talan (1989), Reynaldo Catinding, Jean Ladrihan (1990), Nesimo Paulin Toling (1991), Gloria Martín, Greg Hapalla, Danilo Vergara (1992), Romeo Legaspi (1993), Ferdinand Reyes (1996), Regalado Mabazza (1997), Rey Bancarín, Dominador Bantulán (1998), William Yap Yu, Olimpio Jalapit (2000), Mamad Yusop, Rolando Ureta, Candelario Cayona, Dennis Ramos (2001), Benjaline Hernández, Edgar Damalerio, Sonny Alcántara (2002), John Belén Villanueva, Apolinario Pobeda, Bonifacio Gregorio, Noel Villarante, Rico Ramírez, Juan Pala, Nelson Nadura (2003), Rowell Endrinal, Roger Mariano, Gene Boyd Lumawag (2004) y Edgar Amoró (2005).





La violencia incesante

Mientras, el 10 de abril, los representantes de Reporteros sin Fronteras se encontraban en Tacurong (Mindanao), un presentador de la antena local de *Radyo Natin*, **Alberto Martínez**, resultaba gravemente herido por disparos, a pocos kilómetros de allí. También pastor de una iglesia protestante, denunciaba con virulencia el tráfico de droga y la influencia de los movimientos armados comunistas e islamistas en la región. Alberto Martínez ha sobrevivido, pero está afectado en la columna vertebral y podría quedarse parálítico para siempre. Desde su cama del hospital, acusó de la agresión a un soldado, y a un vecino, que inmediatamente lo desmintieron. Preguntados por Reporteros sin Fronteras, unos periodistas locales se declararon escépticos en relación con las acusaciones de Alberto Martínez.

Pocas semanas antes, el 28 de enero, **Máximo Quindao** escapó a un intento de asesinato en la provincia de Davao Norte (Mindanao). Refugiado ahora en Manila, el director del semanario regional *Mindanao Truck News* contó a Reporteros sin Fronteras las circunstancias del intento de homicidio: “Cuando me dirigía al domicilio de un político local, se me acercó un hombre que llevaba una gorra y gafas de sol y disparó con un revólver del 45. Me hirió en el hombro izquierdo e intentó alcanzarme de nuevo, pero se le atascó el arma. Yo todavía estaba de pie y escapé. Conseguí refugiarme en un edificio cerrado, y él se dio a la fuga”. De momento, la policía local y el NBI no han procedido a detener a nadie. “Nunca había recibido amenazas directas. ¿Tienen algo que ver mis artículos sobre el tráfico de madera en la provincia?. No lo sé. En todo caso, no puedo vivir en Mindanao mientras no identifiquen a ese asesino. Me he marchado de mi ciudad, pero al menos he salvado la vida”.

En 2004, Reporteros sin Fronteras estableció un número record de intentos de asesinatos o agresiones: una veintena. Por ejemplo, en septiembre, **Gary Fuertas**, corresponsal de la emisora *Bombo Radyo*, fue apaleado en Mid-sayap (Isla de Mindanao, Sur) por sus reportajes sobre el tráfico de droga. En noviembre, fue **Eric Tenerife**, presentador del canal por cable *Progressive Channel* en Bacolod City, en la Isla de Negros (Centro), quien escapó a un intento de asesinato. Hicieron tres disparos sobre su automóvil.

En las regiones más agitadas de la Isla de Mindanao, donde se produce el mayor número de ataques a la prensa, la violencia forma parte del

paisaje mediático. La esposa del realizador de documentales y militante de los derechos humanos **Joey Lozano** da testimonio de ese riesgo permanente: “Ha escapado a tres intentos de asesinato en la Isla de Mindanao. ¿Sabe? Estar casada con un periodista es duro, pero nunca aburrido”.

La Isla de Mindanao agrupa exactamente la mitad de los 52 casos de periodistas muertos desde 1986. Mientras que en Manila y su región solamente han matado a tres profesionales de la información en los últimos dieciocho años, diez periodistas han muerto en el norte de la Isla de Luzón. En total, no bajan de 22 los reporteros muertos en toda la Isla de Luzón, desde la vuelta de la democracia. En la región central de las Islas Visayas, al menos seiscientos periodistas han sido ejecutados o asesinados.

Aunque Mindanao sigue siendo la región más peligrosa, la situación no es homogénea en toda la isla. “Aquí, en Cagayán de Oro, nuestros políticos son más civilizados. Presentan denuncias o presionan para que despida a los periodistas molestos. Al menos, no contratan asesinos”, atestigua el corresponsal de un diario nacional en esta ciudad del norte de la isla.

Reporteros sin Fronteras también pudo constatar que en los períodos electorales se nota un fuerte aumento de la violencia. En 2004, el año más asesino para la prensa, los filipinos votaron presidente y diputados. “Antes, y durante las elecciones, los cronistas de radio se desatan contra los candidatos. Después de las elecciones, perdedores y vencedores se vengan de quienes les combatieron a través de las ondas”, explica Diosa Labiste, periodista en Iloilo City (Sur).

Periodistas de muchas caras

“Los periodistas de provincia tienen tres opciones: ser pobres, dejarse corromper o dejarse matar”, afirma Froilán Gallardo, reportero gráfico que desde hace veinte años cubre la actualidad en la Isla de Mindanao.

Para un periodista de provincias resulta imposible vivir dignamente sólo de su salario. Los corresponsales de la prensa nacional están mal pagados, raramente ganan más de 5.000 pesos (100 dólares), y la prensa local difícilmente puede alimentar a sus hombres. “Yo tengo una granja de pollos y otros de mis colegas trabajan en una ONG, para medios de comunicación internacionales o son propietarios de restaurantes”, explica Hernán de la Cruz, director del periódico regional *Zamboanga Scribe*, publi-

cado en Pagadián. "Esa es nuestra debilidad. Estamos a merced de quienes tienen dinero y poder", afirma el corresponsal de un diario nacional en Cagayán de Oro (Mindanao).

La mayoría de los periodistas muertos en los últimos veinte años tenían una segunda, e incluso una tercera ocupación profesional. Así, **Noel Villarante**, asesinado de un disparo en la nuca el 19 de agosto de 2003 en Santa Cruz (provincia de Laguna, al sur de Manila), también era informador de la policía. Tanto sus colegas, como su familia, están convencidos de que le mataron por sus artículos sobre el tráfico de droga, el juego clandestino o las malversaciones del gobernador local. Pero, no se puede excluir una relación con sus repetidas actividades de informador, entre otras cosas en la lucha antidroga.

Pocos días después del crimen la policía de Santa Cruz detuvo, y entregó a la justicia, a Senando Palumbarit, formalmente identificado por la compañera del periodista. Pero la investigación, atascada según varias personas cercanas al caso, no ha avanzado y Senando Palumbarit quedó en libertad con fianza en diciembre de 2004. Actualmente estaría fugado. La investigación se suspendió por falta de pruebas. A pesar del fracaso, cuatro oficiales de policía, y entre ellos el ex jefe de la policía de Santa Cruz, se repartieron los 200.000 pesos (cerca de 4.000 euros) de la recompensa por la detención del presunto asesino del periodista...

Reporteros sin Fronteras pudo constatar que Noel Villarante no podía cubrir sus necesidades, y las de su familia, tan solo con sus actividades de periodista. En efecto, era un "block timer", es decir alquilaba horas de antena en una radio de FM local. Para pagarlas y pagarse, cobraba de las personalidades a las que entrevistaba, o de las que hablaba favorablemente, en sus "horas de antena". "Raramente investigaba, pero frecuentemente emitía en su programa informaciones, quizá a cambio de un precio, que recibía del abogado del adversario político del gobernador de la provincia", afirma una allegada del periodista.

Reporteros sin Fronteras llama la atención a los directores de los medios de comunicación, para que garanticen un salario mínimo a los periodistas, y a los corresponsales provinciales.

Armas para luchar contra el miedo

Muchos periodistas filipinos aseguran que

algunos de sus colegas llevan armas permanentemente, para defenderse de eventuales agresores. Todas las organizaciones locales de defensa de la libertad de prensa, igual que sus homólogos internacionales, condenan esa actitud.

Este argumento se ve rápidamente rebatido por los responsables del Club de Prensa de Cagayán de Oro (norte de Mindanao), que oficialmente animan a sus miembros a llevar armas de fuego. Richard Vallas, presidente del club y ex manager de la radio *DXPB* en Pagadián, ayuda incluso a los periodistas de la región a conseguir una licencia y un pase de armas. "Ya cuando dirigía la radio, anunciaba en antena que nuestros periodistas iban armados y que organizábamos sesiones de entrenamiento de tiro. Por tanto, la gente estaba al tanto de que íbamos armados y sabíamos disparar. Es una protección", explicó a Reporteros sin Fronteras. También contó que un conocido periodista de Mindanao recargaba frecuentemente el arma cuando estaba en el aire, dejando oír claramente el ruido del cargador de su pistola, para dar a entender que estaba dispuesto a defenderse.

Un antiguo presidente del Club de Prensa, Jerry Orcullo, también es un ardiente defensor de que los periodistas lleven armas. "La postura de las organizaciones internacionales sobre esta cuestión es buena y legítima, pero no es realista ni aplicable aquí. Ir armado es la única manera de continuar haciendo nuestro trabajo. En Irak es mejor no ir armado, porque hay guerra y eso te pone en peligro, al hacerte pasar por un combatiente. Aquí, la posibilidad de que te maten disminuye si llevas un arma". Para apuntalar su argumentación, Jerry Orcullo contó que en Cebú (centro del país), tres periodistas no murieron en un ataque en 2004 porque llevaban armas, y pudieron responder. El presidente Richard Vallas también esgrimió el caso de Juan "Jun" Palas, muerto en Davao (Mindanao) el 6 de septiembre de 2003. "Ya había escapado a dos intentos de asesinato, porque iba armado y respondió. La tercera vez no llevaba el arma, y le mataron", explicó.



Juan Palas

El Club de Prensa de Cagayán de Oro indica que, en 2004, ninguno de los 14 periodistas muertos iba armado. Una afirmación desmen-



tida por las organizaciones de Manila. Según el Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), al menos siete de los periodistas que murieron en los dos últimos años iban armados, y tres protegidos por guardaespaldas.

Al final de esta misión, Reporteros sin Fronteras tiene la sensación de que el debate ha perdido fuerza en la prensa filipina. Todos los periodistas entrevistados afirman que la decisión de llevar, o no, un arma debe ser individual, y tener en cuenta las particulares circunstancias propias de cada situación. Sea como sea, ninguno de los periodistas entrevistados por la delegación iba armado. Ni siquiera algunos de los periodistas de Mindanao de los que, sin embargo, todo el mundo aseguraba en Manila que llevaban el revólver en el cinturón.

“La responsabilidad es nuestra mejor protección”

El Fondo de la Libertad para los Periodistas Filipinos (FFFJ), una red de organizaciones nacionales dedicadas a la protección de los periodistas, editó a finales de 2003 un librito titulado “Seguir con vida: el periodismo es un oficio peligroso. La responsabilidad puede ser nuestra mejor protección”. En el documento, el FFFJ explica que las organizaciones de defensa de la libertad de prensa se enfrentan constantemente a un dilema: por una parte, los medios de comunicación filipinos se encuentran entre los más libres de la región; y por otra, algunos de estos periodistas “abusan de su derecho”, utilizando esa libertad para “enriquecerse, o en el marco de venganzas personales”. La organización reconoce igualmente que “los medios de comunicación tienen que esforzarse. En caso contrario, sus excesos y sus abusos servirán de excusa para los asesinatos de pe-

“Denunciarnos ante la justicia pero no nos matéis”

“Los ataques personales y las acusaciones sin pruebas son cotidianas en las ondas del país. El poder de la prensa puede ser devastador, en estos casos. Por otra parte, las víctimas no tienen ninguna confianza en la justicia, por eso la atacan físicamente”, explica Sheila Coronel, directora del PCIJ. “Hay que hacer que cese esa tendencia de utilizar siempre medios extrajudiciales, para resolver nuestros conflictos. Denunciarnos ante la justicia pero no nos matéis”, casi suplica la directora de este centro, que había premiado a Marlene Esperat por la calidad de sus investigaciones sobre la corrupción.

riodistas”.

Varios observadores sacan las mismas conclusiones. El sistema de los “block-timers”, por ejemplo, que consiste en alquilar horas de antena a periodistas que las llenan como mejor les parece, empobrece la calidad de algunas radios filipinas. Muchos cronistas no dudan en atacar, sin ninguna prueba y con cierta violencia verbal, a políticos locales, empresarios o simples particulares.

La comunidad periodística dispone así de una media docena de expresiones, para designar a quienes practican el chantaje o se dejan comprar. “Periodismo ATM” en referencia al nombre de los cajeros automáticos), “periodismo de sobre” o “periodismo ACDC” (ataque, cash, defensa, cash), etc... Las organizaciones de medios de comunicación denuncian estas prácticas, que colocan a toda la profesión en una mala posición. Un número nada despreciable de los periodistas asesinados en los últimos veinte años practicaba este tipo de chantaje.

La FFFJ también atempera sus manifestaciones, explicando que nada justifica el asesinato de un periodista, y que varios de los profesionales de los medios muertos cada año hacían un trabajo destacable.

“Conocer al enemigo”: cuando el ejército amenaza a la prensa

A principios de abril de 2005 la prensa filipina reveló la existencia de una presentación audiovisual titulada “Knowing the Enemy, Are we missing the point?” (“Conocer al enemigo. ¿Lo entendemos bien?”), realizada por los servicios de inteligencia del ejército (ISAFP) y destinada a que lo vieran determinados oficiales. El objetivo era conocer mejor las actividades del Partido Comunista de Filipinas (CPP) y del Frente Nacional Democrático (NDF) –en lucha armada con el gobierno–, y presentar nuevas iniciativas del ejército para contrarrestar las acciones de ambos movimientos, así como las de su brazo militar, el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA). En la presentación, el ejército afirma que la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas (NUJP) está directamente controlada por el movimiento Artista at Manunulat Ng Sambayanan, una oficina del NDF que actúa en los campos del arte y la cultura. También se encuentra en el documento una página sacada del sitio de Internet de la NUJP, presentando el organigrama completo de la organización. Igualmente se acusa al Centro Filipino para el Periodismo de Investigación (PCIJ), así como una treintena de otras asociaciones religiosas, culturales, so-

ciales o políticas, de tener relaciones con esos movimientos armados.

Pocos días más tarde, el ejército organizó una conferencia de prensa y presentó una versión expurgada de esa presentación. En el nuevo documento no se menciona al PCIJ. El Teniente-comandante Teddy Quinzón explicó a los periodistas que "los responsables de las organizaciones mencionadas no estaban al corriente de que tenían dentro a un miembro del CPP". "El trabajo del ejército es limpiar estas organizaciones", añadió.

Inday Espina-Varona, presidenta de la NUJP, está preocupada. Teme que ahora los militares consideren a los miembros de su organización como enemigos, y eso les exponga a determinados peligros. Reporteros sin Fronteras comparte esa preocupación y condena la actitud del ejército. En algunas regiones muy militarizadas y en tensión (oeste de Mindanao, extremo norte de Luzón), puede temerse que los soldados tomen esas informaciones al pie de la letra y consideren enemigos a los miembros de la NUJP, del PCIJ e incluso a otros periodistas. En una rueda de prensa de responsables del ejército, un periodista del *Philippine Daily Inquirer* resumió muy bien los temores de los profesionales de los medios: "¿Qué esperan diciendo a los militares que estas organizaciones están infiltradas por la NPA, o los comunistas? Los medios de comunicación se convertirán en objetivos, simplemente porque son sospechosos de estar infiltrados". El portavoz del ejército, el Brigadier-general José Honrado, respondió simplemente: "Es su interpretación y la respetamos". Sheila Coronel, directora del PCIJ, lo relativiza y estima que se trata de una práctica habitual, sin demasiadas consecuencias. Según ella, los militares sospechan a menudo que los periodistas apoyan a la guerrilla.

Otras derivas de la lucha antiterrorista

Espoleadas por el gobierno norteamericano, uno de cuyos representantes en Manila calificó recientemente a Mindanao de "futuro Afganistán", las autoridades filipinas han acentuado su guerra contra el terrorismo. Una nueva ofensiva contra los grupos armados siguió los atentados ciegos que, desde febrero de 2004, han costado la vida a más de 350 personas, reivindicados o no por el grupo terrorista Abu Sayaf.

En ese contexto, el gobierno, y especialmente el ejército, intentan controlar la cobertura mediática de las operaciones. "En menos de un año hemos tenido que hacer campaña contra

el proyecto de incorporación de periodistas a las unidades militares, la prohibición de entrevistar a terroristas, y ahora una ley antiterrorista muy represiva", indica Inday Espina-Varona de la NUJP. "La presidenta Arroyo ataca a las bases de la democracia al intentar que se apruebe, de urgencia, esta versión filipina de la Patriot Act", añade Carlos Conde, también miembro de la NUJP.



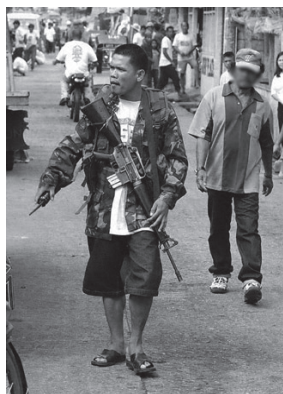
El 5 de marzo de 2005, la presidenta Gloria Arroyo advirtió personalmente a los medios que difunden entrevistas de "grupos terroristas". Pocos días antes, el ejército filipino había reclamado una ley que castigue a los órganos de prensa culpables de entrevistarse con los grupos rebeldes. También está prevista una disposición similar en un proyecto de ley antiterrorista, que actualmente se discute en el Congreso. A pesar de que un portavoz de la presidencia, Igacio Bunye, explicó a continuación que la disposición se aplicará "caso por caso, en función del contenido de la entrevista", no se conocen las sanciones previstas y sigue siendo muy vaga la noción de "grupo terrorista".

El proyecto cuestiona peligrosamente el carácter privado de las comunicaciones de los periodistas, la protección de las fuentes y la cobertura de las operaciones antiterroristas, llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.

"Desde hace años, la prioridad número 1 del gobierno es la lucha contra los grupos armados, ahora calificados de terroristas, pero nunca ha figurado en el orden del día una política global contra la criminalización de la vida política local. ¿Por qué?", se pregunta otra responsable de la NUJP.

Provincias enteras difíciles de cubrir

La isla Sulu, la provincia más militarizada del país, se han convertido en una pesadilla para la prensa independiente. Los principales medios de comunicación se han ido retirando progresivamente y la mayoría de las informaciones difundidas en la prensa nacional proceden de fuentes militares, difíciles de verificar. Igualmente, regiones enteras de la Isla de Luzón o del centro de Filipinas, en las que opera la guerrilla comunista, son de muy difícil acceso para los periodistas.



Este estado de guerra, a pesar de las actuales conversaciones entre el gobierno y el Frente Moro Islamista de Liberación (MILF), impide una cobertura completa e independiente. “Los periódicos locales están presionados por las autoridades locales y militares”,

lamenta un reportero de *Mindanews* en Zamboanga. “En Jolo y Basilán ya no hay periódicos locales. El punto de vista de la población no puede expresarse. En Basilán, la radio local *DXOS* está estrechamente controlada por el ejército”, afirma una periodista de Basilán, que trabajó cinco años en la emisora.

Cuando un periodista intenta una cobertura independiente se convierte en blanco de los asesinatos. Así, a **Candelario Jhun Cayona**, presentador de la radio local *DXLL* en Zamboanga (oeste de Mindanao), le mataron el 30 de mayo de 2001 cuando investigaba el tráfico de droga en la región. En cuanto al joven fotógrafo **Gene Boyd Lumawag**, le abatieron de un disparo en la espalda el 12 de noviembre de 2004, en Jolo. Llegado a la isla con la redactora jefe del sitio informativo *Mindanews*, según la policía fue víctima de dos miembros de Abu Sayaf, Itting Sailani y Omar Sailani. Cinco días después se presentó una denuncia por asesinato. Estarían buscando a los sospechosos. Unos colegas de Gene Boyd Lumawag explicaron a Reporteros sin Fronteras que las acusaciones de las fuerzas de seguridad contra Abu Sayaf son muy difíciles de verificar.

Sobre el terreno, los corresponsales de los medios de comunicación nacionales se encuentran atrapados en un fuego cruzado. “Nuestro corresponsal en Jolo ha sido citado, sucesivamente, por un comandante del ejército al que no le gustó uno de sus artículos, y después amenazado de muerte en un SMS firmado por Abu Sayaf. Le acusan de no dar una parte de su salario al grupo”, explica Leti Boniol del . “Cuando el periódico te paga cien dólares y no te proporciona seguro ni protección ¿cómo vas a tener ganas de ir a cubrir las zonas en conflicto?”, dice indignado Froilán Gallardo, reportero con sede en Mindanao.

Algunos periodistas jóvenes de Zamboanga y la Isla de Basilán han denunciado a Reporteros sin Fronteras la “perspectiva de guerra” de los medios de comunicación filipinos e internacio-

nales. “Solo vienen cuando truena el cañón”, afirma Linda Bansil de Zamboanga. “El gobierno no deja que se manifieste el punto de vista de la mayoría de musulmanes, que no están ni a favor ni en contra de los grupos armados. Y esa idea de prohibir que los periodistas entrevisten a los rebeldes es estúpida y contraproducente. Será el imperio del rumor”, denuncia una joven responsable de una ONG de Zamboanga.

Recomendaciones

Solo la movilización de los periodistas filipinos permitirá romper el círculo vicioso de la impunidad. Durante más de veinte años la indiferencia, e incluso la complicidad, de la policía y la justicia incitaron a los asesinos a sueldo, y a los autores intelectuales, a continuar eliminando físicamente a los periodistas. No tenían nada qué temer.

Los asesinatos, los secuestros o el acoso de periodistas, por parte de los grupos armados y terroristas, representan un peligro permanente para la libertad de prensa. Los reporteros que residen en las regiones donde se producen enfrentamientos armados son las primeras víctimas.

Reporteros sin Fronteras expresa su solidaridad con los periodistas y sus familias, víctimas de esa violencia. La organización pide a las más altas autoridades del Estado filipino que refuercen la lucha contra la impunidad. La policía y la justicia deben hacer todo lo necesario, en una política coordinada, a fin de identificar, detener y condenar y a los asesinos, y los autores intelectuales, de los 52 casos de periodistas muertos por sus actividades, desde 1986.

Filipinas no tiene que ser una excepción en el paisaje internacional de la libertad de prensa y los derechos humanos. La violencia contra la prensa no es una fatalidad.

Por tanto, Reporteros sin Fronteras recomienda:

A las autoridades:

- Que se tomen muy en serio las amenazas a periodistas. Muchos de los profesionales de los medios muertos en el ejercicio de su trabajo habían recibido amenazas antes. El Estado y la policía deben reforzar las medidas de protección cada vez que un periodista denuncie amenazas serias a su integridad física.
- Que aceleren los procedimientos relativos a los asesinos, y autores intelectuales, de perio-



distas.

- Que creen, incluso antes de que finalicen las investigaciones preliminares de la policía, un programa particular de protección de testigos de asesinatos de periodistas.

- Que refuercen los medios materiales y humanos de ese programa. En este momento, el Departamento de Justicia ofrece a los testigos, y a algunos denunciantes, protección durante 6 meses en una casa segura, un alquiler mensual de ocho mil pesos y una ayuda médica.

- Que sensibilicen a los oficiales y suboficiales del ejército y la policía sobre la importancia de la libertad de prensa, y la necesaria protección de los periodistas.

- Que supriman del proyecto de Ley antiterrorista cualquier artículo contrario a la libertad de prensa, entre otros los que se refieren a la protección de las fuentes y la confidencialidad de las comunicaciones.

- Que finalicen la investigación sobre el asesinato de Marlene Esperat. Los autores intelectuales tienen que ser identificados y juzgados.

- Que vigilen el buen desarrollo del proceso del presunto asesino de Edgar Damalerio, y continúen la investigación hasta identificar a los autores intelectuales.

- Que envíen un equipo especial de investigadores y policías a Pagadian, para continuar las investigaciones en los casos de William Yu, Olimpio Palapi, Mamad Yusop, Edgar Damalerio y Edgar Amoro.

- Que dicten ordenes de detención contra Madix Maulana y Norhan Ambol, los dos sospechosos del asesinato de Edgar Amoro, y contra Sauri Hawani, presunto cómplice en el asesinato de Edgar Damalerio.

A las Naciones Unidas:

- Que convoquen al embajador de Filipinas en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para recordarle los compromisos de su país en materia de protección de los derechos humanos.

- Que organicen una misión de investigación en Filipinas, dirigida conjuntamente por los relatores especiales para la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, para los defensores de los derechos humanos, y para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Al Banco Mundial y a la comunidad internacional:

- Que condicionen la concesión de nuevas ayudas económicas a la resolución de los casos de asesinatos de periodistas que hubieran denunciado la corrupción, y entre ellos el caso de Marlene Esperat.

A los medios de comunicación y a las organizaciones de defensa de la libertad de prensa:

- Que establezcan una distinción muy clara entre los casos de periodistas muertos por motivos profesionales y los relacionados con motivos personales, con el fin de garantizar la credibilidad y la estabilidad de la movilización contra impunidad de los crímenes contra la prensa.

- Que evalúen constantemente los riesgos a que se exponen los corresponsales provinciales. En algunos casos, puede ser preferible enviar a un periodista de Manila para realizar un reportaje, que recurrir al corresponsal local.

- Que continúen situando la libertad de prensa en primera página. Es indispensable que los medios filipinos e internacionales cubran las investigaciones y los procedimientos en curso, relativos a los asesinatos de periodistas. También es esencial hacer públicos los casos de amenazas a periodistas.

- Que distingan entre los casos de periodistas muertos por motivos profesionales y los relacionados con motivos personales, para garantizar la credibilidad y la continuidad de la movilización contra la impunidad en los crímenes contra la prensa.